



El ministro de Universidades Joan Subirats, este miércoles en el ministerio. / SANTI BURGOS

JOAN SUBIRATS
 Ministro de Universidades

“Los chiringuitos no podrán ser universidades”

ELISA SILIÓ / CARLOS E. CUÉ
 Madrid

El catedrático de Ciencias Políticas Joan Subirats (Barcelona, 71 años) se ha convertido a matacaballo en el segundo responsable en la historia del Ministerio de Universidades, creado apenas hace dos años como cartera única, con un presupuesto muy pequeño y las atribuciones compartidas con las comunidades y Ciencia; pero también con una tarea enorme por delante: presentar en Europa una nueva ley universitaria a la altura de los retos del siglo XXI. La alcaldesa de Barcelona se resistió a dejar marchar a Madrid a su faro ideológico y, por eso, tal como reconoció Manuel Castells en su despedida, él fue el primero en ocupar esa cartera. Subirats es la voz de los Comunes en el Consejo de Ministros y es partidario de una consulta en Cataluña tras acordarse una nueva estructura del Estado.

Pregunta. Si Ada Colau le hubiese dejado ser ministro antes, ¿habría planteado así la ley?

Respuesta. Es un proyecto muy avanzado pero quiero hacer la ley un poco mía. Está bien planteada, estos 20 años que han pasado desde la LOU [Ley Orgánica de Universidades] son de cambios muy profundos y las universidades están en un cruce espectacular de conocimiento, difusión, innovación, transferencia...

Hay una necesidad evidente de puesta al día de la ley.

P. ¿A qué se refiere con hacer la ley suya?

R. Hay que poner énfasis en el valor de la docencia o que la ley recoja bien la complejidad de un sistema universitario que tiene cuatro grandes actores: la Unión Europea, cada vez más presente; el Estado, que tiene un papel de planificación, de redistribución y de evaluación; las comunidades, que suponen el 77% de la financiación; y algo innegociable: la autonomía de las universidades. Hay que respetar sus espacios de poder. La ley no puede ser muy reglamentista y, en cambio, ha de marcar horizontes, hacer florecer elementos: ciencia abierta [aquella libre y accesible para todos], ciencia ciudadana [la investigación que se hace entre científicos y voluntarios] y formación a lo largo de la vida. Son cosas que están en la ley, pero que hay que reforzar.

P. Hoy el negocio de esta formación permanente está sobre todo en manos de universidades privadas a distancia que han estado expidiendo títulos sin control.

R. El sector de 17-18 años, que es el target de las universidades, va a decrecer. Tenemos capacidad e instalaciones en el territorio [para dar formación permanente] con 190 ciudades con un centro de educación supe-

rior, pero para los profesores de universidad es lo menos importante. En el resto de niveles educativos, el profesor tiene que pasar por cursos de capacidad docente, pero si tú eres doctor, se da por supuesto que sabes dar clase. Deberíamos conseguir que la universidad no sea una excepción. Una forma de defender a los estudiantes es defender la docencia. Hay gente que dice: “Si quitas la investigación en la Universidad, es una academia”. Bueno, ni una academia ni un laboratorio.

P. País Vasco o Cataluña hacen política de país financiando sus universidades, mientras en otras comunidades están asfixiadas. ¿Pasará factura a sus economías?

R. Debemos de defender la diversidad como un valor del sistema, pero hemos de ser capaces desde el Estado de redistribuir.

P. ¿Cómo se consigue?

R. La Universidad de Granada trabaja en recuperar canales de irrigación con entidades locales. Es un ejemplo magnífico. No quiere decir que la Universidad de Barcelona solo se dedique a investigar internamente. Cuando yo era concejal, planteábamos el papel de las universidades en el desarrollo local de Barcelona. No me da miedo la diversidad, una función del Estado es la capacidad de redistribuir.

P. Hay que terminar con la precariedad de los asociados. ¿Ofrecerán otra fórmula?

R. La aplicación de la idea de asociado ha sido totalmente tergiversada y no logramos atraer a profesionales de prestigio como asociados. Tendremos probablemente que pagar más. No podemos convertir esa figura en un refugio de precariedad y reducir la carga docente de titulares y catedráticos. Reducir su número al 20% creo que es correcto, pero para recuperar el perfil de asociado. La reforma laboral trabaja también en una lógica de

“La nueva ley está bien planteada, pero quiero hacerla un poco mía”

“No logramos atraer a profesionales de prestigio como profesores asociados”

“Estamos estudiando fórmulas para que los contratos duren lo que los proyectos”

“Unidas Podemos trajo una nueva agenda y otra forma de hacer política”

evitar la precarización. Por ejemplo, eliminando los contratos de obra y servicio.

P. Se han quejado los rectores.

R. Es buena noticia. Cuando dirigía proyectos, mi universidad me decía que iba a reservar parte [del presupuesto] para pagar la indemnización si hubiera juicio. La nueva norma dice que tienes que usar un contrato laboral indefinido e incorporar la indemnización. Estamos viendo con el Ministerio de Ciencia si hay alguna fórmula que permita que los contratos duren lo que el proyecto.

P. ¿Hay que reinventar el papel de la Universidad privada?

R. La última universidad que hicimos fue la Politécnica de Cartagena en 1998 y en estos 20 años se han fundado 20 privadas. El decreto [de creación y reconocimiento de las universidades] intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Las universidades tienen que cumplir unas condiciones determinadas [también las públicas, con altos porcentajes de precariedad]: un porcentaje dedicado a la investigación, número de doctores... Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer. Si no cumplen, tendrán que decidir qué quieren ser porque no podrán ser universidades.

P. ¿Habrá menos universidades privadas entonces?

R. Tenemos que ir con cuidado. Tenemos la Universidad de Deusto, Navarra, Ramón Llull, Comillas... que tienen una tradición enorme, por tanto, no hay que confundir en el mundo de las privadas con cualquier cosa. Las universidades que no cumplen el decreto, tienen ahora cinco años para ser universidades de verdad. Si no lo pueden hacer, no podrán llamarse universidad.

P. Visto desde dentro del Gobierno, ahora que es ministro, ¿el conflicto catalán tiene solución?

R. Creo que ha habido un cambio muy importante. Ahora hay una mesa de diálogo y se asume que estamos frente a un problema político. Ahora tienen que pasar cosas.

P. La encuesta de EL PAÍS señalaba el desgaste del Gobierno. ¿Qué tendría que hacer la coalición para evitar caer ante una ola de derecha?

R. La encuesta señalaba que el grado de acuerdo sobre las políticas del Gobierno es mucho mayor que sobre la política. Esto es importante. Las políticas de igualdad, de transición ecológica, digital, de redistribución, de protección, están bien valoradas. La capacidad de recuperar la legitimidad de la política debería basarse en la capacidad de protección de la gente.

P. ¿Qué queda del Unidas Podemos que llegó a tener cinco millones de votos?

R. Bueno, se fundó en 2014 y ahora estamos en un Gobierno de coalición, no está mal. Entonces el bipartidismo parecía infranqueable. UP trajo una nueva agenda, un nuevo sentido común y otra manera de hacer política. El balance es positivo.